

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, nuevo (9) de febrero del año dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, proceden dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310500420130002001, promovido por **Alba Lucía Jiménez Hernández** contra **AGROGANADERA LOS SANTOS SA EN LIQUIDACIÓN S.A.**, a resolver el recurso de apelación presentado por ambas partes, en contra la sentencia parcialmente condenatoria emitida el ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **19 de 2023**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, la demandante solicitó la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo con la pasiva, por término indefinido, desde el 24 de octubre del año 2005 y el 14 de agosto de 2009, que dicha relación terminó de manera unilateral e injusta, y por ende, el pago de los siguientes conceptos: indemnización por despido injusto, cesantías por los años 2007, 2008, 2009, sanción moratoria por no consignación de las cesantías en un fondo durante esos años, intereses a las cesantías, primas de 2007 al 2009 vacaciones proporcionales por los años 2007, 2008, 2008 y las sanciones por el no pago oportuno de las acreencias solicitadas.

Para fundamentar sus pretensiones expuso, que ingresó a laborar con la pasiva desde el 4 de octubre de 2005, mediante un contrato verbal a término indefinido, con el cargo de secretaria bajo una última asignación salarial de \$1.500.000 y para el año 2009 la empresa entró a liquidación obligatoria en atención a que sus socios fueron investigados por el delito de enriquecimiento ilícito por dineros provenientes del narcotráfico, con lo cual, los bienes de la compañía entraron a extinción de dominio desde el año 2010.

Narró que desde el año 2007 no volvió a recibir dinero alguno por concepto de prestaciones sociales, y para el año 2009 fue despedida sin el pago de las prestaciones sociales de los años 2007, 2008 y 2009. Argumentó que para el 17 de agosto del año 2010 elevó reclamación escrita al liquidador de la empresa solicitando el pago de las acreencias laborales, reiterando ello para el 9 de diciembre del año 2010.

Admitida la demanda mediante auto del veintinueve (29) de mayo del año dos mil trece (2013), página 34, y notificada la pasiva el treinta (30) de mayo del año dos mil catorce (2014), dio repuesta al libelo gestor así:

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y expuso, que no le constan los hechos narrados en el escrito de demanda, pues recibió los bienes y contabilidad de la Sociedad Agroganadera Los Santos por ser la depositaria provisional.

Propuso las excepciones de mérito que denominó “Prescripción”, “Compensación”.

En **sentencia del ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016)**, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, declaró la existencia de la relación laboral entre las partes, ordenó al pago de las cesantías, prima de servicio, intereses a las cesantías, vacaciones compensadas, todo ello debidamente indexado, y absolvió a la pasiva de las demás pretensiones incoadas, declarando no probada la excepción de prescripción por observar diligencia en la parte actora.

RECURSO DE APELACIÓN

Presentado por el apoderado de la parte actora centró su recurso en exponer que es procedente la condena de la sanción establecida en el artículo 65 del CST y artículo 99 de la ley 50 de 1990, pues estima no puede predicarse buena fe por la demandada, pues su situación jurídica no era óbice para proceder con el cumplimiento del pago de las acreencias laborales pertinentes, pues era una empresa suficientemente solvente.

Por su parte, la pasiva elevó recurso de alzada solicitando se modifique la sentencia en cuanto a la condena impuesta a su prohijada, y se confirme respecto a la absolución, bajo el entendido que, la carga probatoria en este caso, la tenía la demandante, quien en su actitud omisiva se abstuvo de solicitar al fondo de cesantías las constancias de los aportes y pagos correspondientes a dichos periodos, simplemente limitándose a decir que no se le habían pagado. Así mismo, manifestó que no puede predicarse la mala fe de su prohijada sino, de la demandante, quien no realizó de manera diligente el trámite de notificación. Finalmente, solicitó la modificación de los valores liquidados por el despacho al estimar que se tomó un salario diferente para los años 2007 y 2009 y predicó la buena fe de su representada. Corrido el traslado para alegar, ninguna de las partes hizo pronunciamiento alguno.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar si en el presente caso, si es procedente o no el pago de las sanciones del art 65 del CST y art 99 de la ley 50 de 1990, establecer la carga probatoria en el proceso respecto a los rubros que se indica en la demanda se adeuda y verificar los valores consignados en la sentencia.

CONSIDERACIONES

Frente al recurso promovido, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y el artículo 167 ibidem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo; y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba al demandado cuando éste se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado. (Sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

El contrato de trabajo es un acuerdo celebrado entre dos partes, una de ellas denominada trabajador y otra empleador, donde el primero presta personalmente

sus servicios orientado bajo la subordinación hacia el segundo, y recibiendo una contraprestación denominada salario.

En aras de equilibrar la relación desigual entre las partes consecuente al poder subordinante del empleador, el legislador, consagró un mínimo de derechos y garantías, que propenden por el respeto a la dignidad del trabajador. Es por ello, que le basta al trabajador respecto al pago de acreencias laborales, enunciar su ausencia de pago, para que, el empleador deba, por su parte, acreditar haber cumplido con las obligaciones que en razón de la ley y la relación contractual lo atan, y si bien la demandante se encuentra en mejor posición de probar dicha situación con los certificados de pago de las planillas en pensión, dicha situación no puede excusar al empleador, y beneficiarse del extremo débil de la relación contractual, pues se insiste, por su parte, debe dejar suficientemente acreditado el cumplimiento de sus obligaciones.

Considerando lo anterior, no le asiste la razón al procurador judicial de la parte accionada, al exponer, que la demandante debió acreditar la documental suficiente para determinar si la pasiva cumplió o no con sus obligaciones.

Fue objeto de reparo igualmente, la liquidación de prestaciones sociales realizada por el despacho para lo cual, teniendo en cuenta lo descrito en el documento obrante de folio 5 a 11 del proceso, respecto al IBC de cotización de la demandante, se extraen los siguientes salarios:

2007 : \$750.000

2008: \$798.000

2009: \$878.000

Es así, como liquidadas las prestaciones sociales por los años completos de 2007, 2008 y por 8 meses del año 2009, la liquidación de las prestaciones sociales arroja los siguientes valores:

Por el año 2007:

Cesantías: \$750.000

Prima de Servicios primer periodo: \$375.000

Prima de Servicios Segundo periodo: \$375.000

Intereses a las cesantías: \$45.000

Vacaciones: \$375.000

Por el año 2008:

Cesantía: \$798.000

Vacaciones: \$399.000

Intereses a las cesantías: \$47.880

Prima de servicio Primer Periodo: \$399.000

Prima de Servicio Segundo Periodo: \$399.000

Por el año 2009:

Cesantías: \$585.333

Vacaciones: \$292.667

Intereses a las cesantías: \$23.413

Prima de Servicio Primer Periodo: \$439.000

Prima de Servicio Segundo Periodo: \$146.333

Totales:

Cesantías: \$2.133.333

Intereses a las cesantías: \$116.293

Vacaciones: \$1066.667

Primas: \$ 2.133.333

Le asiste razón al procurador judicial de la pasiva en afirmar en su recurso, que las prestaciones deben liquidarse en atención al salario de cada año, y no, al salario final de la relación laboral, como se expuso en la sentencia.

Ahora, respecto a las sanciones solicitadas, negadas por el Juez de primera instancia y recurridas por la parte actora, deviene importante recordar el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990:

«El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo»

Y, en el numeral 3 de dicho canon dispone que: *«El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. «*

Respecto a ello, la Sala de casación Laboral, ha precisado, que la imposición de la indemnización moratoria, así como la sanción por falta de consignación de las cesantías en un fondo y sanción por falta de pago de intereses a las cesantías, no tienen aplicación automática, pues la buena fe demostrada del empleador es suficiente para eximir de ello.

Igualmente, en sentencia SL 194 de 2019, refirió que es el empleador quien finalmente tiene la carga de demostrar que actuó sin intención fraudulenta, lo cual, había sido objeto de pronunciamiento en sentencia de radicación N° 32.416 de 2010 y en la SL 11436 de 2016, cuando refirió:

“Por lo demás, cabe anotar que si bien es cierto en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia esta Sala de la Corte consideró que, de cara a la imposición de la sanción por mora en el empleador incumplido existía una presunción de mala fe, ese discernimiento no es el que en la actualidad orienta sus decisiones, porque, pese a que mantiene su inveterado y pacífico criterio sobre la carga del empleador para exonerarse de la sanción por mora, de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe, considera que ello en modo alguno supone la existencia de una presunción de mala fe, porque de las normas que regulan la señalada sanción moratoria no es dable extraer una presunción concebida en tales términos, postura que, ha dicho, se acompasa con el artículo 83 de la Carta Política.”

No está de más recordar, que la sanción moratoria consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, tiene lugar siempre y cuanto subsista la relación laboral y sólo hasta la fecha de culminación de esta, pues terminada la relación contractual entre las partes, lo procedente es, la sanción contemplada en el artículo 65 del CST, como lo detalló la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL859-2021:

“En consecuencia, respecto a las cesantías causadas durante el periodo laborado en el año 2012, no tiene razón la recurrente al invocar la imposición de la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 hasta la fecha en que se satisfaga la obligación, porque como ya se explicó corre solo hasta la data de terminación del contrato, de manera que lo que procede a partir de esta última, es la indexación de los dineros que por tal concepto debieron consignarse oportunamente, en cuanto, se repite, no se pretendió la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo.”

Ahora, no puede decirse que, el hecho de la liquidación e intervención judicial del empleador, fuera un hecho relevante para que no se pagara las prestaciones sociales, pues dicha situación no le releva de sus obligaciones contractuales, pudiendo, quienes actuaren como administración de los bienes, realizar los apartes presupuestales pertinentes para asegurar la satisfacción de los derechos laborales.

Por tal motivo no es dable predicar que existió buena fe en el actuar de la demandada ante la omisión en el pago de las acreencias laborales.

Se concluye, una sanción moratoria del artículo 99 de la ley 50 de 1990, contada desde el 15 de febrero del año 2008, fecha en que se debieron consignar las cesantías del año 2007 y hasta el 14 de agosto del año 2009, en total 546, en cuantía de \$15.979.600.

Con respecto a la sanción del artículo 65 del CST, teniendo en cuenta que la demandante devengó un salario superior al mínimo legal mensual vigente, y reclamó el pago de las prestaciones en los 24 meses siguientes a la terminación de la relación laboral, en un principio se entendería que tiene derecho a ello, empero,

la falta de la presentación de la demanda en ese mismo término, es decir, dentro de los 24 meses siguientes, concluye en la negativa de tal pago, como se explicó por la Sala Laboral en sentencia CSJ del 6 de mayo de 2010:

“No obstante las notorias deficiencias en la redacción de la norma, esta Sala De la Corte entiende que la intención del legislador fue la de establecer un límite temporal a la indemnización moratoria originalmente concebida por el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, de tal suerte que, como regla general, durante los veinticuatro (24) meses posteriores a la extinción del vínculo jurídico el empleador incumplido deberá pagar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo y siempre y cuando el trabajador haya iniciado su reclamación ante la justicia ordinaria dentro de es veinticuatro (24) meses, como aconteció en este caso.

Después de los veinticuatro meses, en caso de que la situación de mor persista, ya no deberá el empleador una suma equivalente el último salario diario, sino los intereses oratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la superintendencia Bancaria, hoy financiera, hasta cuando el pago de lo adendado se verifique efectivamente; intereses que se calcularán sobre las sumas debidas por conceptos de salarios y prestaciones en dinero.

Cuando no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la terminación del contrato de trabajo, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera. “.

Fenecida la relación laboral el 14 de agosto de 2009, la demandante elevó reclamación a su empleador el 17 de agosto del año 2010, página 46 del proceso, e interpuso la demanda el 19 de diciembre de 2012 conforme sello radicador, página 4, por lo cual, si bien reclamó a su empleador dentro de los 24 meses NO interpuso la demanda dentro de dicho término y por ende, en principio le sería procedente el pago de los intereses moratorios, contados desde el 14 de agosto del año 2009,

a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

Sin embargo, también se encuentra acreditado en el plenario, que la pasiva entró el proceso liquidatorio, pues basta con observar el certificado de existencia y representación legal que reposa en página 42 a 45 en donde se lee que, mediante escritura de 2745 del 13 de octubre del año 2009, se dio inicio al estado liquidatorio de la sociedad, y por ende, considera la Sala, que sólo hasta dicha fecha correrán los intereses moratorios, pues en fecha posterior a ello, la empresa se encuentra en un estado especial de fenecimiento ante su situación jurídica particular, por lo que se acoge el precedente de la Sala laboral, en sentencia CSJ del 10 de oct. de 2003, No. 20764, donde el liquidador no puede proceder al pago de acreencias por fuera del marco legal que le impone el proceso liquidatorio, sin que este supeditados el control de los mismos a su voluntad.

Corolario a lo expuesto, tiene derecho la demandante al pago de los intereses moratorios, contados desde el 14 de agosto del año 2009, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera y hasta el 13 de octubre del año 2009, sobre los valores ordenados como prestaciones sociales.

Así las cosas, la Sala CONFIRMARÁ, REVOCARÁ y MODIFICARÁ la decisión de manera parcial, por las razones expuestas, quedando incólume los puntos no objeto de apelación.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Modificar la sentencia proferida por el juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, respecto a las cuantías de la condena impartida, las cuales serán las siguientes:

Cesantías: \$2.133.333

Intereses a las cesantías: \$116.293

Vacaciones: \$1066.667

Primas: \$ 2.133.333

SEGUNDO: Revocar en cuanto a la absolución de la sanción del artículo 65 del CST y 90 de la ley 50 de 1990, y en su defecto condenar a la accionada al pago de \$15.979.600, por concepto de sanción por no consignación de las cesantías en un fondo, y al reconocimiento de los intereses moratorios, contados desde el 14 de agosto del año 2009, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera, hasta el 13 de octubre del año 2009, sobre los valores ordenados como prestaciones sociales.

TERCERO: Confirmar la providencia recurrida en cuanto la pasiva debía probar el pago de las acreencias laborales.

CUARTO: Sin costas en esta instancia, ante la prosperidad de los cargos de ambas partes.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **29d666500caf21df842ca049cb7c62eea7b856d4b0c9ca483cbf9b177cbd58bc**

Documento generado en 09/02/2023 02:14:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>